



El último día de Pacheco reabre debate por controles y sobreestimación de producción

El último día de **Máximo Pacheco** al mando de Codelco quedó marcado por la controversia de la sobreestimación de producción de cobre y por las dudas sobre cómo operaron los controles internos de la estatal. Aunque este 25 de mayo deja oficialmente la presidencia del directorio, continuará ligado al negocio del litio como integrante de NovaAndino, filial creada para desarrollar el joint venture con SQM. El miércoles asumirá **Bernardo Fontaine** en medio de una presión política creciente y con cuestionamientos que ya alcanzan al gobierno corporativo de la cuprífera.

La polémica se originó tras detectarse que la producción de diciembre de 2025 habría sido inflada en cerca de 27 mil toneladas. El ajuste derivó en la devolución de bonos por más de US\$14 millones que habían recibido más de 6 mil trabajadores de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz. La situación abrió un debate sobre responsabilidades ejecutivas y sobre el rol del directorio en la supervisión de la información reportada al mercado.

Uno de los análisis más duros provino de **José Hofer**, experto y analista de la firma, Supply Chain Insights. "No es grave, es gravísimo", afirmó. El especialista comparó el caso con escándalos corporativos internacionales como Enron, Petrobras, Shell y Glencore. "Acá no hay errores de conteo cuando se traspasa el terreno de la estrategia y se cae en el área de los delitos", sostuvo. Hofer apuntó directamente a la administración superior de la estatal y cuestionó la efectividad de los mecanismos internos de control. "La gravedad del asunto se supo por la auditoría de KPMG, no por controles internos", señaló. También advirtió que el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética "parece más un protocolo que un compromiso de rigor con aplicabilidad inmediata". El experto también cuestionó la gestión financiera de los últimos años. "Una deuda



Laurence Golborne, exministro de Minería; Daniel Mas, ministro de Economía y Minería; Tamara Agnic, directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE); y José Hofer, consultor de Supply Chain Insights.

bruta que sube de US\$17 billones en 2022 a US\$26 billones en 2025; una disminución de aportes al fisco de cerca de US\$1.000 millones; atrasos y mala ejecución en todos los proyectos estructurales", enumeró. A juicio de Hofer, "la gestión de Pacheco hoy muestra su cara más triste".

En Radio 13C, el exministro **Laurence Golborne** planteó que "incorporar capital privado en una fracción, sería una alternativa que debiese analizarse". También advirtió que "la gestión macro, de largo plazo, requiere cambios mucho más profundos". El exsecretario de Estado agregó que la discusión sobre los bonos no puede derivar en una crisis mayor dentro de la minera: "que paga mal paga dos veces, no es lo correcto", sostuvo. Desde el oficialismo y la oposición surgieron presiones adicionales. En Radio Infinita, el ministro **Daniel Mas** aseguró que el escándalo "sin duda afecta el clima interno". En paralelo, diputados republicanos emplazaron a Pacheco a renunciar al directorio de NovaAndino para evitar "cualquier duda, costo reputacional o conflicto asociado a la administración anterior de Codelco". La directora **Tamara Agnic** defendió el

actuar del directorio en entrevista con T13 Radio. "Falló la segunda línea de defensa", dijo, aunque sostuvo que "afortunadamente tenemos una tercera línea muy robusta". La presidenta del CACE insistió en que "el directorio no falló" y afirmó que la denuncia anónima permitió detectar el problema antes de que se transformara "en una bola de nieve". En paralelo, el debate sobre la devolución de bonos abrió tensiones con los sindicatos. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), **Héctor Roco**, sostuvo que los trabajadores no pueden transformarse "en la variable de ajuste" por decisiones adoptadas a nivel ejecutivo. Sus declaraciones surgieron en medio de corrientes internas y externas que exigen la restitución de los montos pagados por metas que posteriormente fueron corregidas. Aunque parte de los supervisores manifestó disposición ética a devolver los recursos, desde sectores sindicales insisten en que las responsabilidades deben concentrarse en la administración superior de la estatal y no en los trabajadores que recibieron incentivos calculados sobre información oficial entregada por la propia empresa.